**PROYECTO PERSEPOLIS – CIUDADES INTELIGENTES**

**VERTICAL: GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**

**Oswaldo Porras Vallejo – Consultor.**

**oaporrasv@gmail.com;** [**oswaldop@iadb.org**](mailto:oswaldop@iadb.org)

**CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO Y DE LA VERTICAL GOBIERNO (GESTIÓN PÚBLICA LOCAL). Análisis del sector**

La Constitución Política de 1991 definió a Colombia como un Estado Unitario y descentralizado, por lo cual entidades territoriales tienen una alta corresponsabilidad en el cumplimento de fines fundamentales del Estado: promover la prosperidad general, garantizar los bienes y servicios, los derechos y deberes a los ciudadanos, entre otros.

En desarrollo de lo anterior, el diseño y puesta en marcha de la descentralización ha estado acompañado de estrategias orientadas a fortalecer institucionalmente a los gobiernos territoriales, con el fin de darles instrumentos y herramientas que soporten el desarrollo de las funciones que se les han asignado y el uso efectivo de los recursos públicos a su cargo.

En las diferentes etapas del proceso ha sido evidente para el Gobierno nacional la necesidad de impulsar acciones más amplias de asistencia técnica a las entidades territoriales, por lo cual, además de los procesos puntuales de asistencia técnica desarrollados de manera directa por las diferentes entidades nacionales, se han diseñado y desarrollado programas específicos para tal fin, tales como i) el Programa de Desarrollo Institucional –PDI-; dirigido a las administraciones municipales, con el propósito fundamental de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y el manejo de recursos, ii) Sistema Nacional de Capacitación Municipal, el cual buscó fortalecer la capacidad de autogestión de los municipios para reactivar social y económicamente a las comunidades, iii) el Programa Mejor Gestión de los Departamentos. Este Programa fue desarrollado de manera conjunta por el Gobierno nacional, con la participación directa de los Ministerios de Gobierno, Hacienda y Desarrollo Económico y del DNP, con la participación de la cooperación alemana GTZ y con apoyo del PNUD. En su primera etapa el Programa se orientó a fortalecer procesos propios de la administración departamental, entre ellos los relacionados con asistencia local. No obstante con el desarrollo del enfoque regional, el Programa avanzó hacia procesos que involucraran a la ciudadanía, tales como construcción de visión, participación en prestación de servicios públicos, el desarrollo local, entre otros, y iv) El programa de gobernabilidad territorial en cabeza de la Presidencia del República, el Ministerio de Gobierno, la ESAP y la Federación de Municipios y el DNP, como resultado de una iniciativa de la Corporación Andina de Fomento.

El proceso de descentralización ha venido transformando de manera positiva la administración de los asuntos públicos territoriales; sin embargo persisten situaciones de baja capacidad de la institucionalidad que se traducen en altos niveles de pobreza y desigualdad social de la población, bajo desarrollo económico, diferencias marcadas en los niveles de desarrollo entre entidades territoriales y baja competitividad regional, entre otros.

El 50% de los ingresos de los gobiernos es ejecutado por las entidades territoriales; sin embargo, el nivel de eficiencia del gasto público municipal es casi 57 puntos de 100 máximos posibles situación que hace indispensable fortalecer las capacidades institucionales de departamentos, distritos y municipios para optimizar el uso de los recursos

A la situación anterior, se suma el hecho que el país tiene expectativas de recursos crecientes para las entidades territoriales, recursos cuya ejecución requiere de un esfuerzo por realizar ejercicios de planificación estratégica y mejorar las capacidades de ejecución y control, entre otras.

Salvo algunos esfuerzos puntuales, la información y los sistemas de evaluación y seguimiento al desempeño de los gobiernos municipales y departamentales, así Como su uso por parte de los actores involucrados en la gestión del desarrollo territorial, es limitado. Igualmente los procesos de certificación de calidad, tanto de los gobiernos departamentales y municipales, como de quienes prestan servicios de capacitación y asistencia técnica, son limitados y no cuentan con modelos pedagógicos flexibles apoyados en TICs.

A nivel de los gobiernos locales no se trabaja en crear capacidades para que la organización, por sus propios medios sea capaz de aprender, de forma continua y sistemática a identificar los problemas, buscar las soluciones más convenientes y transferir los aprendizajes a todos los equipos. El recurso humano recibe entrenamiento, habilidades y destrezas técnicas, pero siguen trabajando en un ambiente organizacional poco apto para desarrollar sus nuevas potencialidades porque persiste la desconfianza generalizada, no hay libertad de expresar pensamientos e ideas de mejoramiento, subyace el conflicto interpersonal y se limita la creatividad.

## **La planificación y la gestión pública: orientada a resultados y participativa**

El cumplimiento de los objetivos de la descentralización depende en buena medida, de la gestión realizada por las entidades territoriales, la cual debe concretarse en un manejo eficiente y responsable de los recursos, una mayor inversión social, niveles crecientes de participación de la ciudadanía, transparencia, e incremento permanente de la gobernabilidad.

En un Estado social de derecho, unitario y descentralizado, la gestión de la Nación y los territorios debe estar orientada a resultados; en otras palabras, en el sector público los procesos de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control deben darse de manera articulada, coordinada integral y sistémica; asegurando así el cumplimiento de los planes y programas pactados de manera democrática con la ciudadanía.

De allí, se desprende otro requerimiento fundamental para la gestión pública moderna, su transparencia y por consiguiente, la importancia que la comunidad participe en sus diferentes etapas.

**A continuación se presenta una breve descripción de las características actuales de la gestión pública territorial.**

**Estructura y procesos administrativos territoriales**

La Constitución Política planteó los principios de concurrencia, subsidiaridad y complementariedad, orientándolos a lograr un engranaje más efectivo de los tres niveles de gobierno para que se articulen de acuerdo con sus competencias y en pro de un propósito común: el desarrollo integral que garantice el bienestar de la ciudadanía.

En términos de desarrollo institucional y de modernización del Estado, la descentralización ha buscado el fortalecimiento de la gestión pública, a nivel nacional y territorial, de tal forma que la administración, en general, cuente con los recursos, procedimientos e instrumentos necesarios para ejercer sus funciones, en el marco de su misión.

En desarrollo de lo anterior, el país ha avanzado en la clarificación de competencias, en la organización de estructuras administrativas menos burocráticas, en el desarrollo de procesos participativos y en el mejoramiento de los ejercicios de planificación, lo cual hace esperanzador el horizonte de la gestión territorial.

También se ha avanzado en la definición de estrategias de coordinación y fortalecimiento de los procesos como la planeación, ejecución y seguimiento. Así mismo, se percibe una mayor voluntad política, la cual se refleja en procesos de saneamiento fiscal, de participación ciudadana en la elaboración de instrumentos como el plan de desarrollo y la presupuestación, en la autoevaluación y en una mayor conciencia por re direccionar los recursos hacia la inversión.

No obstante los avances en la gestión pública territorial, aún persisten problemas relacionados con desarticulación y descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno, el incumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobernantes con sus ciudadanos, ineficiencia en el uso de recursos y en consecuencia todavía se evidencia falta de confianza de la ciudadanía frente a lo público.

Las principales dificultades en la gestión pública territorial se relacionan con las limitaciones en los procesos de planificación, empezando con la propia formulación del plan de desarrollo, el cual en la mayoría de los casos se diseña para el corto plazo y por ende no se constituye en una herramienta idónea para orientar la gestión, por lo general su viabilidad financiera e institucional es mínima y no está relacionado de manera directa con los procesos de presupuestación de recursos, esto conduce a inapropiados procesos de ejecución, lo cual unido a las dificultades en los procesos de contratación, conlleva a obras inconclusas, innecesarias o con costos muy superiores a los inicialmente previstos.

Paralelamente, no se ha desarrollado una cultura de autoevaluación y rendición de cuentas, se elaboran informes y reportes a solicitud de terceros y en cumplimiento de normas, pero no se han estructurado procesos efectivos de seguimiento y evaluación que permitan a la propia administración conocer sus avances y desaciertos y con base en ello redefinir sus políticas.

En cuanto a su funcionamiento interno, la estructura administrativa y la organización institucional del nivel central de los departamentos y municipios se caracterizan por ser poco modernas y gerenciales, por la desarticulación de sus dependencias, por la alta rotación de funcionarios del orden directivo y asesor (especialmente en cambios de gobierno), por el bajo desarrollo de instrumentos de gestión como manuales de procedimiento, manuales de funciones actualizados, estudios de organización y métodos, planes estratégicos, procesos de control interno, etc. De otra parte, por insuficiencia de recursos financieros, el tamaño y perfil de la planta de personal de las entidades territoriales se ha venido reduciendo. Todo lo anterior tiene como consecuencia un bajo desarrollo institucional que atenta contra una gestión efectiva.

Una de las mayores limitantes en la gestión territorial la constituyen los sistemas de información, que en la mayoría de casos no existen o son ampliamente deficientes, por lo cual el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas se ve limitado. Esto se agrava con la dispersión de sistemas de información a nivel nacional, que generalmente son incompatibles y desarticulados con los del nivel territorial, llevando a duplicidad de estadísticas.

Respecto a la actitud de los funcionarios, aún no hay una concepción de liderazgo y de gestión gerencial. Así mismo, en algunos casos las relaciones entre los cuerpos colegiados y la administración dificultan la gestión de los gobernantes. Esto es especialmente grave por el desconocimiento sobre la normatividad que rige la administración pública.

En términos de las administraciones públicas el reto está en consolidar municipios y departamentos con estructuras ágiles, modernas, con orientación gerencial, que de manera eficaz y eficiente garanticen un desarrollo sostenible en su jurisdicción y por consiguiente conduzcan al logro de los objetivos de la descentralización.

**Participación ciudadana en la Gestión Pública**

Uno de los rasgos más importantes en las administraciones territoriales modernas debe ser la concreción de una presencia efectiva del Estado, que dé respuesta a los requerimientos y expectativas de la comunidad que se encargue de crear ciudadanía y de propiciar participación organizada. Esto conducirá a la corresponsabilidad de los ciudadanos en su desarrollo y a incrementar la legitimidad y gobernabilidad del Estado.

No obstante los avances después de la Constitución de 1991 por lograr una participación activa de la ciudadanía en la gestión pública, no se ha alcanzado la suficiente cultura política, ni de participación, y mucho menos la comunidad ha asumido plenamente sus derechos y deberes para ejercer el control social y participar efectivamente en la gestión pública y en la política.

Una de las causas a las cuales se le atribuye el anterior diagnóstico, es la proliferación de normas que obligan a crear espacios de encuentro entre la administración municipal y los representantes de la población, espacios que en su mayoría no han sido construidos por iniciativa ciudadana sino por partidos políticos tradicionales, con funciones de fiscalización y en menor medida de consulta, concertación y gestión.

Por su parte, las instancias informales de participación, menos sujetas a normas y restricciones, más flexibles y adaptables a las circunstancias, también han afectado el proceso de participación ciudadana, ya que algunas de ellas se crean de manera transitoria para responder a circunstancias muy particulares y, en consecuencias efímeras, muchas de ellas han sido fruto de los gobiernos en cada ciudad y en algunos pocos casos han sido escenarios de encuentro para la concertación de políticas y de acciones en beneficio de los sectores participantes o del conjunto de la ciudad.

Como consecuencia de lo anterior, aparece un rasgo común: la discontinuidad en la formulación y aplicación de políticas de participación, que se explica sobre todo por el papel discrecional que siguen teniendo los alcaldes en la promoción de la opción participativa.

Por ello, aunque se registran experiencias exitosas de incidencia de la ciudadanía en la definición de políticas públicas, la participación no ha logrado un impacto fuerte como se esperaba, al menos sobre la planeación y la ejecución de dichas políticas. Ha sido más bien en el terreno del control social donde se observan los resultados más halagadores: los procesos de seguimiento a la contratación y ejecución del gasto han contribuido de manera indirecta a la obtención de mejores resultados en la gestión pública.

En la actualidad la puesta en marcha de algunos espacios de participación depende de la voluntad de los alcaldes y de los concejos, tal es el caso de la creación de las Juntas Administradoras Locales y de la contratación con la comunidad.

De otra parte, existe un gran desconocimiento de la ciudadanía frente a lo público, (cómo está organizado el Estado, qué responsabilidades tiene cada nivel de gobierno, con qué recursos cuenta, etc.) por ello cuando existe el interés de participar no hay una cualificación suficiente que permita una participación informada, responsable y efectiva. No hay procesos organizativos de la sociedad civil, la participación se limita a individuos o grupos particulares con intereses propios y la mayoría de las veces antagónicos, no se ha avanzado en la posibilidad de participación integral y concertada de diferentes grupos que busquen el interés colectivo y el mayor impacto social de las inversiones o intervenciones públicas. Generalmente la participación se ve simplemente como una oportunidad para buscar reivindicaciones individuales y puntuales.

Las medidas de la descentralización política han sido excesivamente formalistas y se han dejado de lado interrogantes de fondo como los sectores que tienen derecho a participar, los procedimientos para escoger a los representantes de la comunidad, el nivel decisorio de las instancias y la elaboración de las agendas de discusión.

De las dificultades anteriores se reflejan la falta de flujos de información clara, sencilla, permanente y pública sobre la cual la ciudadanía pueda realizar seguimiento, conocer el estado de su municipio y en consecuencia participar o controlar de manera objetiva.

Finalmente, desde el punto de vista institucional no es claro a quien corresponde la responsabilidad de capacitar a la comunidad y de avanzar en la construcción de ciudadanía, especialmente porque ellos requieren recursos financieros

El panorama frente a la participación demuestra que aún hay mucho por hacer en este tema, especialmente porque en un Estado social de derecho y en el marco de una política de Estado Comunitario, es fundamental establecer estrategias que hagan más consistentes, integrales y efectivos los espacios de concertación entre la administración y la ciudadanía: Se debe avanzar en la democracia participativa, construyendo ciudadanía, empoderando a la sociedad civil para que asuma sus deberes y derechos frente a su propio desarrollo. Este es uno de los principales propósitos y finalidades de un proceso de descentralización.

**Desarrollo sostenibles de las ciudades.**

El rápido proceso de urbanización observado en Colombia durante las últimas décadas ha traído numerosos retos para el desarrollo del país: a) crecimiento desordenado y patrones de uso de suelo inadecuados; b) proporción creciente de la población viviendo en condiciones de pobreza; c) limitación de recursos y capacidades institucionales; y d) crecientes problemas ambientales y sociales, aumento de la vulnerabilidad de la población. Los desafíos de la urbanización acelerada adquieren mayor relevancia en ciudades de tamaño intermedio, donde la población urbana tiende a asentarse cada vez más.

Aproximadamente el 30% de la población urbana vive en asentamientos irregulares. Esta situación genera grandes contrastes en la calidad de vida dentro de las ciudades, con áreas desarrolladas y bien equipadas conviviendo con zonas de extrema pobreza. Los eventos climáticos extremos, cada vez más comunes, acrecientan la situación de vulnerabilidad de esta población. Al mismo tiempo, la vida urbana acelera el proceso de cambio climático: las ciudades son responsables del consumo de más del 75% de la energía distribuida y de la producción de un 75-80% de los gases de efecto invernadero. La rápida urbanización pone una enorme presión sobre las redes de transporte, servicios de emergencia y servicios públicos.

Por otra parte, el proceso de descentralización que se ha desarrollado en Colombia a Partir de la Constitución del 91 ha provocado que una gran parte de los gobiernos locales deba asumir responsabilidades mayores en la provisión de servicios, aunque no explote de forma adecuada sus fuentes propias de ingreso y dependa de transferencias nacionales para su financiamiento.

Las ciudades en Colombia enfrentan cuatro grandes retos prioritariamente, que requieren ser enfrentados bajo un enfoque de Ciudad (Mejorar el transporte público y la movilidad, mayor control a los problemas de seguridad, ahorro de energía y reducción de gases efecto invernadero, prevención de desastres naturales y debilidades en administración del gobierno de la ciudad).

Los anteriores retos, exigen la implementación de proyectos de SMART CITY, destinados a contribuir al logro de la sostenibilidad urbana, ambiental y fiscal de ciudades con una población intermedia en rápido crecimiento.

**Principales necesidades que pueden abordarse mediante soluciones Smart City, en el marco de la vertical Gobierno (Gestión Pública local):**

**Manejo de información sobre el ciclo de la gestión pública territorial**

La gestión pública territorial es el proceso, a través del cual las entidades territoriales (municipios y departamentos) buscan lograr sus fines, objetivos y metas y toma fuerza cuando se cuenta con voluntad política, actitudes, aptitudes e instrumentos para lograr que lo que se planifica, las estrategias, o las decisiones en general se ejecuten. Gestionar es hacer que las decisiones y acciones sucedan, en el sentido o en la dirección que se hayan previsto o planificado, para lograr los objetivos y metas acordadas. El gestor de desarrollo territorial debe estar en capacidad de crear las condiciones institucionales para lograr que las estrategias se realicen.

La “gestión territorial” se dirige a implementar las estrategias de desarrollo estableciendo el rol de los diversos actores y organizaciones que deben concurrir para lograr los resultados de unan política, plan, programa o proyecto, coordinando, promoviendo la adecuación y articulación de los instrumentos públicos, articulando y haciendo alianzas con otros sectores, mediando y conciliando conflictos  e intereses, promoviendo liderazgo y empoderamiento,  y en general creando condiciones institucionales, políticas y técnicas entre quienes deben intervenir para producir los resultados pretendidos  a través de las políticas públicas.

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta las grandes necesidades que poseen la mayoría de las ciudades en Colombia para gestionar el desarrollo, las *Soluciones Inteligentes* y en particular el proyecto PERSEPOLIS estarán en condiciones de ofrecer:

* Apoyo en el diseño de estrategias para lograr que los planes, políticas, programas y proyectos se ejecuten, utilizando soluciones Smart City.
* Capacitar y crear capacidades en los equipo técnicos para que logren implementar las estrategias de desarrollo, buscando que tomadores de decisión, actores y organizaciones sean gestores de procesos de desarrollo.
* Elaborar indicadores de seguimiento y evaluación que permitan establecer impactos de las políticas públicas y definir estrategias para mejorar la gestión de objetivos y metas.
* Diseño, coordinación, implementación y acompañamiento de programas de asistencia técnica territorial y fortalecimiento institucional.
* Apoyo en la elaboración de metodologías y guías para fortalecer la gestión pública territorial y realizar su evaluación y seguimiento.

I**nformación y capacidad para realizar análisis de las finanzas de las ciudades e identificar sus potenciales para contratar nuevas inversiones**.

Colombia ha evidenciado una tendencia a aumentar las responsabilidades de gasto en los gobiernos territoriales, principalmente en salud, educación y agua potable y saneamiento básico. Para el efecto, ha desarrollado un modelo soportado en seis fuentes principales de financiamiento: i) un sistema de intergubernamental de transferencias de la Nación a las entidades territoriales, el cual tiene un componente significativo creciente y sostenido de transferencias automáticas ii) diversos mecanismos de cofinanciación, de carácter condicionado, con el fin de apalancar el gasto de las entidades territoriales en asuntos de relevancia estratégica para el nivel nacional; iii) un esquema de impuestos que las entidades territoriales recaudan por autorización de la ley, tales como el predial unificado, industria y comercio, circulación y tránsito, sobretasa a la gasolina y los impuestos al consumo; iv) las regalías, expresadas ahora en un nuevo Sistema General de Regalías; v) recursos del crédito; vi) los ingresos provenientes de la venta de servicios y, para el caso de las grandes ciudades, las utilidades de sus empresas industriales y comerciales.

Como resultado de la combinación de fuentes de financiamiento territorial, en las dos últimas décadas, el gasto público descentralizado colombiano, especialmente en los gobiernos municipales, creció sostenidamente a tasas importantes.

En relación con lo estrictamente financiero, las soluciones y proyectos Smart City contribuyen al logro de lo siguiente:

* Fortalecimiento de las rentas territoriales y de las capacidades administrativas
* Revisión integral (desde la óptica de sostenibilidad fiscal, territorial y sectorial) y propuestas de ajuste al Sistema General de Participaciones
* Implementación efectiva del Sistema General de Regalías
* Análisis de complementariedad de fuentes y de esquemas de compensación fiscal
* Revisión y ajuste a la normatividad en temas relacionados con manejo, control de fuentes de financiación.
* Así mismo, soluciones Smart City facilitan la evaluación de las actuales fuentes de financiamiento de las ciudades; su soporte normativo; su impacto en materia de contribución al cumplimiento de estándares de calidad, cobertura y continuidad en la prestación de servicios públicos, y al eficiente ejercicio de las competencias y su impacto en la estructura presupuestal territorial.

El Proyecto PERSEPOLIS constituye una oportunidad para mejorar la planeación financiera de las ciudades, en la medida que facilita: i) el análisis de las finanzas municipales (Análisis histórico de la estructura fiscal y de gasto), ii) Identificación de tendencias y proyección de escenarios, iii) Definición de objetivos y estrategias para el área financiera, iv) la combinación ideal de fuentes de financiamiento, y v) el establecimiento de la capacidad de ejecución de los proyectos del plan de desarrollo.

Por último, la viabilidad de que el proyecto PERSEPOLIS, sea implementado en una ciudad, dependerá de la capacidad de financiamiento de dicha ciudad, la cual podrá estar soportada en sus propios recursos (rentas propias) o en el crédito. Por su parte, las posibilidades de que una ciudad pueda acceder al crédito, dependerá de su capacidad de endeudamiento.

De acuerdo con la Ley 358 de 1997 y la Ley 819 de 2003, un municipio tendrá capacidad de pago (autonomía para endeudarse- SEMAFORO VERDE), cuando los indicadores dispuestos por la ley incluida el nuevo crédito presenten los siguientes niveles:

SOLVENCIA[[1]](#footnote-1): Intereses deuda / ahorro operacional ≤ 40% y

SOSTENIBILIDAD[[2]](#footnote-2): Saldo deuda / ingresos corrientes < 80%

Superávit Primario[[3]](#footnote-3) / Intereses, debe ser mayor o igual a 100%.

**Información e instrumentos de análisis para evaluar los resultados de la gestión pública (fiscal, legal e institucional) de las ciudades, incluyendo análisis comparativo entre ellas.**

Evaluar los resultados de la gestión pública a nivel municipal, resulta relevante teniendo en cuenta que más del 50% del gasto público lo ejecutan los gobiernos territoriales. Así mismo, los Alcaldes son elegidos popularmente y deben rendir cuentas a la ciudadanía, para lo cual herramientas como las que ofrece el proyecto PERSEPOLIS facilitarían esta responsabilidad.

La evaluación de la Gestión de los gobiernos municipales y departamentales se viene realizando anualmente, dando cumplimiento a lo ordenado en: Constitución Política, en las leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001 y Decreto ley 028 de 2008. Dicha evaluación, aborda los siguientes componentes: i) el avance en la ejecución de sus planes de desarrollo (eficacia), ii) la eficiencia en la provisión de servicios básicos, iii) el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal y las prácticas de gestión administrativa y fiscal.

La eficacia mide el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobernante en el plan de desarrollo, a partir de la comparación de los resultados alcanzados con las metas programadas y con los recursos financieros disponibles en la entidad. Medir el avance del plan de desarrollo de la ciudad i) permite conocer los compromisos reales de la Administración, ii) da cuenta de los logros frente a las metas previstas, iii) produce Información para la planificación y la toma de decisiones, iv) ayuda a focalizar recursos y acciones de asistencia técnica y de apoyo a la gestión y v) facilita el Control social y rendición de cuentas

Por su parte, la evaluación de la capacidad administrativa del Gobierno de la Ciudad, da cuenta de la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, así como la adopción de acciones, métodos, procedimientos de prevención, control y evaluación, para el mejoramiento continuo de la entidad municipal.

De lo anterior, se deduce que uno de los retos para el proyecto PERSEPOLIS, es desarrollar productos y servicios que hagan más eficiente la evaluación de la gestión de los gobiernos locales y que a su vez estos puedan contar con herramientas más expeditas que faciliten la rendición de cuentas.

**JUSTIFICACIÓN DE LA VERTICAL GOBIERNO (GESTIÓN PÚBLICA LOCAL):**

Las soluciones Smart City bajo el contexto de la vertical Gobierno (Gestión Pública Local), le facilitan a la Administración municipal tener un mejor control de los aspectos relacionados con la gestión pública de su municipio, en particular lo siguiente:

* Permite conocer los compromisos reales de la Administración municipal
* Da cuenta de los logros frente a las metas previstas
* Generar Información para la planificación y la toma de decisiones
* Ayuda a Focalizar recursos y acciones de asistencia técnica y de apoyo a la gestión.
* Mide y explica la capacidad de gestión territorial
* Facilita el Control social y rendición de cuentas
* Las soluciones Smart City para municipios permiten conocer el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobernante en el plan de desarrollo, a partir de la comparación de los resultados alcanzados con las metas programadas y con los recursos financieros disponibles en la entidad.

**A continuación se mencionan algunos aspectos que justifican el diseño e implementación de soluciones Smart City al interior de los municipios, las cuales están orientadas a fortalecer las capacidades institucionales de las Administraciones municipales:**

1. Existe un avance en la entrega de competencias y recursos del gobierno central a los gobiernos locales, lo cual requiere, entre otros, fortalecer la capacidad institucional y gerencial de las Administraciones municipales: se requiere pasar de alcaldías que son administradoras de servicios públicos a gerentes del desarrollo.
2. El modelo de descentralización vigente en el país ha asignado a las entidades territoriales, y en particular a los municipios, responsabilidades directas de prestación de servicios públicos. Como consecuencia, administran la mayor parte de los recursos públicos del país. Más del 50% de los recursos públicos para inversión es ejecutado por los gobiernos municipales y departamentales; sin embargo, el nivel de eficiencia del gasto público municipal es casi 57 puntos de 100 máximos posibles[[4]](#footnote-4), situación que hace indispensable fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos territoriales con el desarrollo de soluciones inteligentes que les permita optimizar el uso de los recursos.
3. Dada la magnitud de los recursos manejados a nivel municipal y su impacto en la prestación de servicios a la ciudadanía, es fundamental implementar soluciones Smart City para asegurar la eficiencia y eficacia de los gobiernos territoriales.
4. A pesar de los diferentes programas de asistencia técnica que se han desarrollado para apoyar la gestión municipal, aún no se cuenta con un sistema de gestión inteligente que sistematice, evalúe y facilite la administración pública municipal.
5. No existe una adecuada interacción del gobierno municipal con el sector público, el sector privado y la comunidad, lo cual limita el desarrollo territorial y la gobernabilidad.
6. Salvo algunos esfuerzos puntuales, la información y los sistemas de evaluación y seguimiento al desempeño de los gobiernos municipales y departamentales, es limitado y no cuentan con modelos pedagógicos flexibles apoyados en TICs.
7. Los gobiernos municipales requieren fortalecer los procesos de Monitoreo, seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas. Asi Mismo, requieren de soluciones tecnológicas que les permita fortalecer su capacidad de gestión para la prestación de servicios, atención al ciudadano (con énfasis en acciones dirigidas a la racionalización de trámites), generación de capital social, presupuesto, recaudo tributario, gerencia pública, entre otros.
8. El Proyecto PERSEPOLIS en su vertical Gobierno estará orientado a mejorar las capacidades administrativas, financieras y sectoriales de las entidades territoriales al fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales en dos dimensiones: i) Mejorar el desempeño y los resultados en todas las áreas de la gerencia pública (planeación, presupuestación, gestión de ingresos y gastos, formulación de proyectos, gestión de recurso humano, adquisiciones, seguimiento, evaluación y control de la Gestión Territorial), ii) apoyar el desarrollo de estrategias, programas e instrumentos para la rendición de cuentas publicas y para mejorar el control ciudadano.
9. El Proyecto PERSEPOLIS está en capacidad de apoyar a departamentos y municipios en cada una de las etapas de la gestión pública (desde la planeación hasta la evaluación y rendición de cuentas) para hacerlas más eficientes. Las soluciones ofrecidas por el proyecto PERSOPOLIS serán diferenciadas dependiendo de las características y particularidades de cada municipio. El Proyecto brindará soluciones inteligentes para avanzar en la transparencia de la gestión y fortalecer el control social.
10. El Proyecto PERSEPOLIS y sus diferentes instrumentos y herramientas se implementará y será validad con las la participación activa de todas las dependencias de la Administración municipal, con el fin de que estos sean pertinentes y coincidan con las dinámicas y necesidades del municipio.
11. El Proyecto estará acompañado de una estrategia que garantice su sostenibilidad. Si bien se contará con recursos para su diseño, montaje y puesta en marcha a través del Crédito, el Modelo que se diseñe deberá estar acompañado de una estrategia que permita que las actividades que se desarrollen puedan ser aplicadas de manera sostenible por las entidades territoriales que hacen parte de él, así como para que las entidades nacionales rectoras de las diferentes áreas constitutivas del Modelo estén en capacidad de realizar los ajustes normativos e institucionales requeridos para que dicho Modelo pueda ser expandido a las demás entidades territoriales

**FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA VERTICAL GESTIÓN PÚBLICA LOCAL**

Colombia ha evidenciado una tendencia a aumentar las responsabilidades de gasto en los gobiernos territoriales, principalmente en salud, educación y agua potable y saneamiento básico. Para el efecto, ha desarrollado un modelo soportado en seis fuentes principales de financiamiento: i) un sistema de intergubernamental de transferencias de la Nación a las entidades territoriales, el cual tiene un componente significativo creciente y sostenido de transferencias automáticas ii) diversos mecanismos de cofinanciación, de carácter condicionado, con el fin de apalancar el gasto de las entidades territoriales en asuntos de relevancia estratégica para el nivel nacional; iii) un esquema de impuestos que las entidades territoriales recaudan por autorización de la ley, tales como el predial unificado, industria y comercio, circulación y tránsito, sobretasa a la gasolina y los impuestos al consumo; iv) las regalías, expresadas ahora en un nuevo Sistema General de Regalías; v) recursos del crédito; vi) los ingresos provenientes de la venta de servicios y, para el caso de las grandes ciudades, las utilidades de sus empresas industriales y comerciales.

Los gobiernos territoriales podrán financiar la implementación de soluciones inteligentes con las siguientes fuentes:

1. Recursos propios de libre inversión.
2. Sistema General de Participaciones (componente Propósito General)
3. Sistema General de Regalías
4. Recursos de Crédito
5. Recursos de cofinanciación del orden Nacional y departamental
6. Recursos de cooperación.

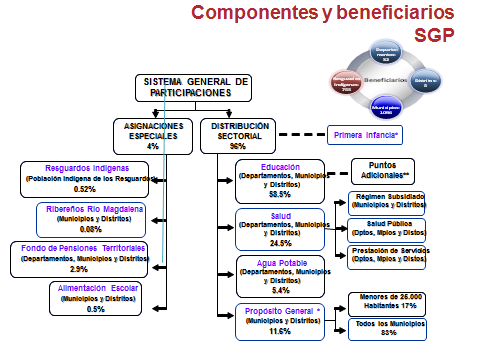
A continuación, se describen las principales fuentes de financiación de la gestión y el desarrollo territorial (Municipios y departamentos):

**Sistema General de Participaciones (SGP).**

El Sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que la Nación transfiere, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), a las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, y a los resguardos indígenas, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, agua potable y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

Las transferencias (SGP) han sido la fuente principal de financiamiento del gasto público territorial y han contribuido a compensar los desbalances fiscales de la mayoría de departamentos y municipios, convirtiéndose en un mecanismo de apoyo a la redistribución horizontal, a favor de la financiación del gasto social de su competencia.

En términos de financiación de servicios sectoriales, el modelo actual de transferencias, constituido por el Sistema General de Participaciones- SGP- ha contribuido de manera importante al incremento de las coberturas de los servicios básicos, y por lo tanto al cumplimiento de las competencias asignadas a las entidades territoriales. No obstante, a pesar de su crecimiento constante y sostenible, y debido a la dinámica propia de cada sector, aún no se ha alcanzado el objetivo de lograr cobertura universal de los servicios, y por supuesto, los recursos aún son insuficientes para financiar acciones de calidad de los servicios financiados.



**Rentas Propias.**

Estas están compuestas por ingresos tributarios y no tributarios. Los tributarios a su vez se dividen en:

Directos: Corresponden a gravámenes establecidos por ley que consultan la capacidad de pago y recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas y por tanto no son trasladables a otros actores económicos.

Indirectos: son gravámenes establecidos por ley no relacionados con la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, sino con el tipo de actividades realizadas y por tanto pueden ser trasladados a otros actores económicos.

Los ingresos tributarios son de propiedad de la entidad territorial, tienen carácter obligatorio, son generales, según su base gravable y son exigidos coactivamente, si es del caso.

Los no Tributarios, corresponden a Tasas, Multas y Contribuciones. Estos ingresos son recibidos en forma regular y se originan por la prestación de un servicio público, la explotación de bienes o la participación en los beneficios de bienes o servicios, transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al presupuesto territorial, pero que no correspondan a impuestos.

Principales impuestos municipales

* Impuesto Predial: Ley 44 de 1990, Ley 242 de 1995
* Impuesto de industria y comercio: ley 97 de 1913, Ley 14 de 1983, Decreto Ley 1333 de 1986.
* Impuesto complementario de avisos y tableros: ley 97 de 1913, ley 84 de 1915, Ley 14 de 1983, Decreto Ley 1333 de 1986, ley 75 de 1986, D.R. 3070 de 1983, ley 140 de 1994.
* Impuesto a la publicidad exterior visual: Ley 140 de 1994.
* Sobretasa a la gasolina motor: Ley 488 de 1998, Ley 788 de 2002 (modifica tarifas)
* Impuesto Degüello de ganado menor: Ley 20 de 1908, Decreto Ley 1333 de 1986.
* Impuesto alumbrado público: Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915.
* Impuesto Transporte de Hidrocarburos: Ley 141 de 1994.
* Impuesto nacional a la explotación de oro, plata y platino: ley 488 de 1998
* Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y de gas: ley 97 de 1913, ley 84 de 1915.
* Contribución sobre contratos de obra pública: ley 418 de 1997, ley 548 de 1999, ley 782 de 2002, ley 1106 de 2006 (amplía hasta 2010 la vigencia del impuesto).
* Impuesto municipal de espectáculos públicos: Ley 12 de 1932, Decreto Ley 1333 de 1986.
* Impuesto nacional de espectáculos públicos con destino al deporte: Ley 1 De 1967
* Impuesto de delineación urbana: Decreto Ley 1333 De 1986, Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Ley 88 de 1947, Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 44 De 1990.
* Contribución de valorización municipal: ley 25 de 1921, decreto 1333 de 1986.
* Participación en la plusvalía: ley 388 de 1997.
* Juegos de suerte y azar, derechos de explotación: ley 643 de 2001.

Las rentas propias son importantes por:

* Ayudan al logro de las Metas de desarrollo
* Mejoran la Eficiencia y fortalecen la Descentralización
* Cofinancian las responsabilidades de gasto (competencias)
* Garantizan Gobernabilidad (legitimidad + aceptabilidad)
* Fortalecen la autonomía local
* Facilitan tener unas finanzas sanas
* Permiten enfrentar la Globalización y ser Competitivos

**Sistema General de Regalías**

De conformidad con el Acto Legislativo 05 de 2011, el Sistema General de Regalías (SGR) corresponde al conjunto de ingresos recibidos por las entidades territoriales por la explotación de recursos naturales no renovables. Así mismo hacen parte del SGR las asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones.

Con esta reforma se crean los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), de Desarrollo Regional (FDR), de Compensación Regional (FCR) y de Ahorro y Estabilización (FAE), Ahorro Pensional Territorial (APT), se mantiene el derecho de los departamentos, municipios y distritos en donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos. El SGR cuenta con la siguiente estructura:



# Distribución de los Recursos de Regalías

# La distribución del SGR es realizada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP- en cumplimiento de lo señalado en el numeral 5 del artículo 9 de la Ley 1530 de 2012[[5]](#footnote-5) “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del SGR”, aplicando los diferentes parámetros, porcentajes y reglas de distribución contenidas en el artículo 2 del Acto Legislativo N° 05 de 2011, la Ley 1530 de 2012, y el Decreto 1073 de 2012, que en términos generales se pueden sinterizar así:

Fiscalización, Yacimientos y Cartografía: “(…) de los ingresos del Sistema General de Regalías, se destinará un porcentaje del 2% para fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo[[6]](#footnote-6)…”.

Municipios río Magdalena y Canal del Dique: “(…) Se asignará el 0.5% de los ingresos del Sistema General de Regalías para proyectos de inversión de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, incluidos, los del Canal del Dique[[7]](#footnote-7)…”.

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación: “(…) se podrá disponer hasta del 1% de los recursos del Sistema General de Regalías. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalías…[[8]](#footnote-8)” Porcentaje distribuido entre el DNP y la Contraloría General de la República -CGR-.

Funcionamiento del SGR: “(…) Asígnese hasta el 2% anual de los recursos del Sistema General de Regalías para su funcionamiento[[9]](#footnote-9)…”.

El Fondo de Desarrollo Regional -FDR: Corresponde a los porcentajes señalados en el parágrafo 2 transitorio del artículo 2 del A.L. Se distribuye entre los departamentos y Bogotá aplicando una formula en donde se tienen en cuenta dos variables, la población y el NBI. El 60% de los recursos del FDR se distribuye en proporción a la participación de cada departamento en la población total del país y el restante 40% según la pobreza relativa, medida con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-. Para estos efectos, se utilizaron las proyecciones oficiales de población suministradas por el DANE. El NBI, en todos los casos, es el suministrado por el DANE, según el Censo 2005;

Este fondo, busca mejorar la competitividad de la economía, así como el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales mediante la financiación de proyectos de inversión de impacto regional.

Fondo de Compensación Regional -FCR: Corresponde a los porcentajes señalados en el parágrafo 2 transitorio del artículo 2 del A.L. 05 de 2011. En su distribución se conforman tres bolsas: i) Una primera bolsa equivalente al 60%, al interior de esta se aplica el 50% de la bolsa para los departamentos de NBI mayor a 30%. El restante 50%, solo para departamentos con municipios de NBI mayor a 35%, los cuales se distribuye así: 40% de estos recursos, en proporción a la participación de cada departamento en la población total del país, 50% según la pobreza relativa, medida con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, y el 10% restante, según la tasa de desempleo departamental; ii) Una segunda bolsa del 30%: para los municipios de NBI mayor a 35%, que se distribuye en proporción a la población de dichos municipios; iii) una tercera bolsa del 10%: para los municipios de categorías 4, 5 y 6 con NBI menor al 35% que se distribuye en proporción a la población 60% y NBI de dichos municipios 40%. Para estos efectos, se usaron las proyecciones oficiales de población, el NBI y desempleo suministrados por el DANE.

Tiene como propósito financiar los proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales más pobres del país. Y tiene también una destinación para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades indígenas y para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Respeto a la distribución de los recursos a los FCR y de FDR, la Constitución establece un régimen de transición, el cual está establecido en parágrafo 2 transitorio del artículo 2[[10]](#footnote-10).

Luego de realizar la distribución de los fondos y beneficiarios del total de los recursos restantes del Sistema General de Regalías se distribuye entre los Fondos de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional y Asignaciones Directas en una transición así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Asignaciones Directas | FCR -FDR |
| 2012 | 50% | 50% |
| 2013 | 35% | 75% |
| 2014 | 25% | 65% |
| 2015 en adelante | 20% | 80% |

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación: Corresponde a un 10% de los ingresos del SGR después de descontar fiscalización, funcionamiento, monitoreo y ribereños del rio Magdalena y Canal del Dique. Se asigna entre los departamentos y Bogotá en la misma proporción en que se distribuyan a los departamentos los recursos de los FCR y FDR.

Este fondo se crea para incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, con proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en la economía y en la sociedad en general, especialmente en los proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones.

Fondo de Ahorro y Estabilización: Corresponde al porcentaje señalado en A.L. 05 de 2011 del 25% en el primer año. Se distribuye entre los departamentos en la misma proporción en que participen en los recursos destinados en el año correspondiente al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional, al ahorro pensional territorial, al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTeI- y a las asignaciones directas.

Ahorro pensional territorial: Corresponde a un 10% de los ingresos del SGR después de descontar fiscalización, funcionamiento, monitoreo y ribereños del rio Magdalena y del Canal del Dique. Se distribuye entre departamentos y municipios, teniendo en cuenta la participación en el monto total de los pasivos pensionales no cubiertos que se encuentren registrados en el sistema de información del Fonpet, atendiendo a las variables de Población (40%) y NBI (60%). Para estos efectos, los datos de pasivo del Fonpet son los reportados por la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Asignaciones Directas: Está destinado a los departamentos, municipios y distritos en los que se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como a los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos. Sin embargo esto no significa que no puedan participar en los demás fondos. Con este fondo se financiarán proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.

En relación con la información sobre las Entidades Receptoras de asignaciones directas y compensaciones (Productores y Puertos) estos datos son suministrados por el Ministerio de Minas y Energía y corresponden a los porcentajes señalados en el parágrafo 2 transitorio del artículo 2 del A.L. 05 de 2011. Son el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un período determinado, tales como: volúmenes de producción; precios base de liquidación; tasa representativa del mercado y porcentajes de participación de regalías por recurso natural no renovable, en las condiciones establecidas en la ley y en los contratos. En el caso de la distribución de asignaciones directas, los datos corresponden a las distribuciones enviadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- e Ingeominas, hoy competencia en cabeza de la Agencia Nacional de Minería -ANM-.

**Recursos de Crédito.**

Son los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellos mediante los cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Dentro de estas operaciones están comprendidas:

* La contratación de empréstitos.
* La emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública.
* Los créditos de proveedores.
* El otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales.

**PRINCIPALES NORMAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL**

**Normatividad relacionada con Planeación y participación**

* C.P. Artículo 339. Establece que todos los niveles de gobierno deben elaborar un plan de desarrollo, para “…asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley”.
* C.P. Artículo 259. Se sustenta en el voto programático, en el sentido que el programa de gobierno se hace efectivo a través de la ejecución del plan de desarrollo. “Mandato que imponen los electores a sus gobernantes al inscribirse como candidatos”.
* C.P. Artículo 343 y 344. Seguimiento y evaluación a la gestión.
* Ley 131 de 1994 - Voto programático.
* Ley 134 de 1994 - mecanismos de participación ciudadana.
* Ley 136 de 1994 - régimen municipal.
* Ley 1551 de 2012- Actualización ley régimen municipal
* Ley 152 de 1994 - Ley orgánica de planeación.
* Ley 388 de 2000 - sobre los planes de ordenamiento territorial municipal.
* Ley 1454 de 2011 - Ley Orgánica Ordenamiento Territorial.
* Ley 1625de 2013 – Ley de Áreas Metropolitanas
* Ley 489 de 1998 - sobre la organización de la rama ejecutiva del poder público.

**Normatividad relacionada con los temas fiscales:**

* Acto Legislativo 01 de 2001- Creación del Sistema General de Participaciones.
* Acto Legislativo 04 de 2007 Reforma al Sistema General de Participaciones.
* Ley 617 de 2000 (ley de ajuste fiscal)
* Ley 1176 de 2007 que desarrolla el AL 04 de 2007 y reforma la ley 715 de 2001.
* Ley 715 de 2001- Ley de Competencias y recursos.
* Normas presupuestales: Decreto 111 de 1996; Ley 819 de 2003, Ley 1483 de 2011.
* Normas de endeudamiento territorial: Ley 358 de 1997; decreto 696 de 1998.
* Normas de regalías: Acto Legislativo 05 de 2011. Decreto 4050 de 2011, Ley 1530 de 2012, decretos 1073, 1074, 1075, 1076, 1077 de 2012). Acuerdos CR y Circulares: http://sgr.dnp.gov.co/

**Normatividad relacionada con las competencias territoriales:**

* Artículo 151. Leyes orgánicas y Asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (…)
* Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias de la Nación y de las entidades territoriales.
* Artículo 356. La ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones -SGP (…)
* Leyes 715/01 y 1176/07. Normas orgánicas que establecen las competencias de las entidades territoriales.

**PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

A continuación se describen los principales problemas que se presentan los gobiernos municipales, los cuales limitan el desarrollo de su gestión y que pueden ser resueltos haciendo huso de “Soluciones Inteligentes”:

**Problemas relacionados con el ejercicio de la planeación y la participación ciudadana:**

1. Los gobiernos municipales no cuentan con métodos y herramientas adecuadas para rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía
2. La ciudadanía no cuenta con los incentivos y medios adecuados para participar en los procesos de planeación municipal y de ejecución de su respectivo Plan
3. Los gobernantes locales no logran medir en tiempo real los avances de la ejecución del Plan, lo que les impide una adecuada focalización de los recursos y monitorear el cumplimiento de sus metas

**Solución propuesta**

1. Desarrollo de Aplicativo y automatizar los procesos de generación y flujo de información, que permita a la Administración (en cabeza del Alcalde) difundir el contenido del PDM, informar sobre el nivel de cumplimiento de las metas del Plan y que facilite la participación ciudadana en su ejecución.
2. La información a ser publicada debe ser diferenciada y estar en formatos que pueda ser consultada y utilizada por cada grupo de interés (gremios, ciudadanía, órganos de control, Concejo, etc).
3. La solución tecnológica debe ser compatible con los diferentes medios de comunicación (internet, prensa, radio, etc).

**Problemas relacionados con el proceso presupuestal municipal:**

Los procesos de programación, ejecución y seguimiento del presupuesto municipal (ingresos y gasto público) no permiten una adecuada administración de las fuentes de financiación y del gasto municipal, lo cual conlleva a un desaprovechamiento de su potencial tributario y a deficiencias en la ejecución del gasto público.

**Solución propuesta**

1. Desarrollar y poner en marcha el Sistema de Gestión Financiera municipal, con el propósito de generar y difundir información financiera municipal confiable y oportuna y fortalecer la capacidad de seguimiento fiscal y financiero del municipio, utilizando para ello un programa informático.
2. Con la implementación de este sistema se espera, entre otras, lograr una mayor interacción y comunicación entre las diferentes dependencias de la Administración al manejar una única información, mejorar la calidad y oportunidad de la información, estandarizar los procesos y procedimientos, consolidar la información, mejorar la cultura organizacional y disminuir los costos operativos.

**Problemas relacionados con los sistemas de información municipal.**

Los sistemas de información al interior de las alcaldías son incipientes y/o están desarticulados entre dependencias, lo que impide generar información para la toma de decisiones y lograr una gestión moderna y eficaz.

**Soluciones propuestas**

1. Automatizar el flujo de información entre dependencias al interior de la Administración,
2. Parametrizar y estandarizar la información,
3. Desarrollo de aplicativo para mejorar la calidad de los procesos administrativos dentro de la alcaldía,
4. Automatizar y Mejorar los aplicativos existentes para medir el desempeño del gobierno municipal, en términos del cumplimiento de las metas y del nivel de eficiencia en el uso de los recursos

1. El indicador de SOLVENCIA, indica la capacidad del Municipio para responder por sus obligaciones en el corto plazo y reaccionar ante fluctuaciones financieras, al comparar los intereses con el potencial de recursos disponibles (ahorro operacional). [↑](#footnote-ref-1)
2. El indicador de SOSTENIBILIDAD refleja la capacidad del Municipio para generar recursos que respalden las obligaciones financieras en el mediano plazo. Es un indicador fuerte en la medida en que no incorpora los activos de la entidad como respaldo, sino los ingresos corrientes de que trata la Ley 358 de 1997. [↑](#footnote-ref-2)
3. De acuerdo con la ley 819 de 2003, Para entidades territoriales con pasivos corrientes pendientes de pago, originados en déficit de vigencias anteriores, el Superávit Primario / Intereses, debe ser mayor o igual a 100%. [↑](#footnote-ref-3)
4. Medición del Desempeño Integral Municipal 2009. DNP. [↑](#footnote-ref-4)
5. “Artículo 9°. Funciones del Departamento Nacional de Planeación: (…)

   5. Calcular e informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la Distribución de los recursos del Sistema General de Regalías entre los fondos y los diferentes beneficiarios.(…)” [↑](#footnote-ref-5)
6. Inciso 5 del Acto Legislativo 05 de 2011 [↑](#footnote-ref-6)
7. Artículo 154 Ley 1530 de 2012 [↑](#footnote-ref-7)
8. Artículo 103 Ley 1530 de 2012 [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 11 Ley 1530 de 2012 [↑](#footnote-ref-9)
10. “*PARÁGRAFO 2o. TRANSITORIO. Respecto de los recursos que se destinarán a las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo y a los Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional, su distribución durante los tres primeros años será así: durante el primer año corresponderá a un porcentaje equivalente al 50% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo y un 50% para los fondos enunciados en este parágrafo; de la misma forma, durante el segundo año se destinará un porcentaje equivalente al 35% y al 65% respectivamente; y durante el tercer año se destinará un porcentaje equivalente al 25% y el 75%, respectivamente.*

    *En el evento en que durante el período comprendido entre los años 2012 y 2014, las asignaciones directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, sean inferiores al 50% del promedio anual, en pesos constantes de 2010, de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y 2010; y durante el período comprendido entre los años 2015 y 2020, sean inferiores al 40% del promedio anual, en pesos constantes de 2010, de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y 2010; el departamento, municipio o distrito, podrá utilizar los recursos de la asignación del departamento respectivo en el Fondo de Desarrollo Regional, hasta alcanzar dicho porcentaje o hasta agotar los recursos del departamento en el mencionado Fondo, lo que ocurra primer*” [↑](#footnote-ref-10)